

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En autos Rit O-1192-2021, Ruc 2140364739-7, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, caratulados “Depaoli con Municipalidad de Talcahuano”, por sentencia de uno de abril de dos mil veintidós, se acogió parcialmente la demanda interpuesta por doña Gladys Edith Depaoli Depaoli, declarando que existió relación laboral con la Municipalidad de Talcahuano, desde el día 1 de mayo de 2009 hasta el 28 de septiembre de 2021, condenándola al entero de las cotizaciones previsionales, del seguro de cesantía y de salud del periodo durante el que se extendió la relación laboral, sobre la base de la remuneración mensual que indica. Asimismo, se rechazó la demanda de despido indirecto, declarando que el vínculo laboral terminó por renuncia de la actora, y desestimó la demanda de nulidad del despido.

Habiéndose interpuesto recurso de nulidad por ambas partes, una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, los rechazó.

Respecto de dicha decisión la actora dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que la recurrente solicita unificar, dice relación con la calificación jurídica que reviste el no pago de cotizaciones de seguridad social, como un incumplimiento que reviste la gravedad suficiente para la procedencia de la demanda por despido indirecto, en aquellos casos en que la relación laboral es declarada en la sentencia definitiva.

Señala que es erróneo lo decidido por la Corte de Apelaciones de Concepción, en cuanto rechazó el recurso de nulidad que interpuso, fundado en la causal del artículo 477 en relación con los artículos 160 N° 7, 171, y 58 del



Código del Trabajo, al estimar que no es procedente el despido indirecto fundado en el incumplimiento, por parte del empleador del pago de cotizaciones previsionales durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y cuando la existencia del vínculo jurídico se estableció en la sentencia definitiva, opinión que contradice el criterio jurisprudencial sostenido por esta Corte en las sentencias dictada en los autos roles N° 45.879-2017, N° 33.256-2019, y en la pronunciada por la Corte de Apelaciones de Iquique en los antecedentes rol N° 147-2018, cuyas copias acompaña para su contraste.

Solicita se acoja su recurso y se dicte sentencia de reemplazo unificando jurisprudencia en los términos señalados.

Tercero: Que, como se dijo en los acápites precedentes, la judicatura del fondo tuvo por acreditado que el actor prestó servicios ininterrumpidos a la demandada a partir del 1 de mayo de 2009, mediante contratos a honorarios, y cuya prestación se vinculó con una serie de actividades desarrolladas en el departamento social de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Talcahuano, desempeñándose como experto para capturar información a través de la aplicación de instrumentos de encuestaje; realizar trabajos en terreno; confección de catastro y empadronamiento de sectores encuestados; digitación de instrumentos de estratificación y otros procesos de información social y analizar y emitir informes que se requieren conforme al sistema social y ficha de protección social. Asimismo se acreditó que la actora contaba con una serie de derechos y estaba sujeta a obligaciones laborales, cumpliendo un horario, sujeto al control de superiores, de los que recibía instrucciones, habiéndose auto despedido el 28 de septiembre de 2021, invocando la causal del numeral séptimo del artículo 160 del estatuto laboral, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, fundada en el no pago de cotizaciones de seguridad social, las que no fueron solucionadas desde el inicio de la relación laboral y hasta el mes de junio de 2019, fecha en que la demandante declaró y pagó sus cotizaciones previsionales como trabajadora independiente.

Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, se determinó que había una relación laboral, concluyendo que, en el caso de marras, resulta notoria la existencia de subordinación y dependencia en la prestación de servicios, desestimando la tesis de la demandada en cuanto a calificar la relación entre las partes como una de carácter civil al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pues las labores desempeñadas resultan habituales y propias del municipio, no pudiendo catalogarse de cometidos específicos.

En lo que dice relación con la figura del despido indirecto, desestimó su configuración por el no pago de las cotizaciones previsionales, argumentando que



“...las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por tanto, se rigen por el derecho público y solo pueden hacer aquello respecto de lo cual una ley expresa lo faculte. En este sentido, los órganos públicos, en este caso, la Municipalidad de Talcahuano, se encuentra jurídicamente impedida de contratar sobre la base de un contrato de trabajo, salvo casos excepcionales...”

Asimismo, agregó que *“...lo dicho precedentemente excluye de parte de la Municipalidad la idea de simulación o fraude de aquel empleador que intenta ocultar por la vía de contratación a honorarios la existencia de una relación laboral regida que debe quedar sometida al Código del Trabajo.*

En desmedro de los particulares, la municipalidad no tiene la capacidad de convalidar libremente ni de forma que estime del caso. Consecuencialmente, no puede estimarse que haya incurrido en incumplimiento a las obligaciones que impone el contrato por no haberlo escriturado, estando impedida de hacerlo en tanto no exista una sentencia judicial que lo declare...

Lo mismo se concluye respecto al pago de las cotizaciones de seguridad social, que son consecuencia del contrato de trabajo que no ha podido concurrir a celebrar.

Por lo demás, acorde a la contratación a honorarios, desde junio de 2019 y hasta el término del contrato, la demandante declaró y pagó sus cotizaciones de salud y previsión en Fonasa y AFP como trabajador independiente, en razón de la Ley 21.133 que mantiene y regula la obligación de cotizar de los trabajadores independientes”.

En el mismo sentido se pronunció la sentencia impugnada al rechazar el recurso de nulidad fundado en la causa del artículo 477 del estatuto laboral, efectuando, en su motivación novena, las mismas argumentaciones del fallo de primera instancia que transcribe, descartando la existencia de una infracción de ley.

Cuarto: Que la primera sentencia acompañada para la comparación de la materia de derecho relativa a la procedencia de la acción por despido indirecto ante el no pago de las cotizaciones previsionales de un trabajador contratado a honorarios en una municipalidad en la que se reconoce la existencia de una relación laboral, correspondiente al ingreso N° 45.879-2017 de esta Corte, dictada con fecha 31 de julio de 2018, expresa, que, una vez acreditada la existencia de un vínculo jurídico laboral entre las partes: *“...de este modo, y entrando al mérito de la demanda planteada y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, aparece que la demandada no demostró el cumplimiento de las obligaciones emanadas del vínculo laboral reconocido, especialmente la*



circunstancia de no haberse pagado las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente el contrato, lo que, a juicio de esta Corte, al tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, una vez que se acogen a jubilación, como, asimismo, las prestaciones de salud y otros beneficios específicos, aparece que la omisión en el cumplimiento de tal deber configura un incumplimiento grave, que justifica el despido indirecto planteado por la actora, dando derecho a las indemnizaciones legales consecuentes”.

Asimismo, razona que “...de esta manera, deberá acogerse la demanda... declarándose la existencia de la relación laboral, y el carácter de justificado del auto despido formulado por la demandante, por lo cual, deberán concederse las indemnizaciones consecuentes”.

En el mismo sentido se pronuncian los demás fallos de cotejo acompañado, correspondientes al dictado por esta Corte en el rol N° 33.256-2019 y por la Corte de Apelaciones de Iquique, en autos rol N° 147-2018.

Quinto: Que, como se observa, concurren dos interpretaciones sobre una idéntica materia de derecho, presupuesto necesario del recurso de unificación de jurisprudencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 del Código del Trabajo, por lo que corresponde a esta Corte establecer cuál es la tesis jurídica correcta.

Sexto: Que tal como esta Corte ha señalado reiteradamente (Roles N° 27.794-17 y 4.102-2017 y últimamente en los autos roles N° 33.256-2019 y N° 26.811-2019), la figura del auto despido o despido indirecto, contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo, está concebida para el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del contrato de trabajo por los motivos indicados por la ley, de manera que se radica en la persona del trabajador el derecho a poner término al contrato y a solicitar al tribunal que ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan por el despido, con los incrementos legales. Si el tribunal rechaza el reclamo del trabajador, se entiende que el contrato ha terminado por renuncia.

Dicha institución pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual de carácter laboral, que obliga también al empleador a cumplir las obligaciones que surgen para él del contrato de trabajo, dotando al trabajador de un mecanismo de salida del contrato en caso de incumplimiento, mediante su notificación al empleador, cual si fuera un despido, y la denuncia al juzgado del trabajo, que determinará la efectividad de los hechos y, en su caso, dispondrá las mismas indemnizaciones que habrían correspondido si fue el empleador quien puso término injustificadamente al contrato. Lo relevante de este “despido



indirecto”, como lo ha denominado la doctrina y la jurisprudencia, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual la ley regula las causales de terminación del contrato de trabajo y establece los mecanismos de compensación para el caso que el empleador no las respete. No se trata, pues, de una renuncia del trabajador –que de por sí constituye un acto libre y espontáneo– sino de una situación no voluntaria en que el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho a obtener las indemnizaciones propias del despido.

Séptimo: Que por otro lado, tal como ha sido resuelto por esta Corte en reiteradas ocasiones (entre ellas, en el Rol N° 42.973-2017), el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*.

Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, al indicar: *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*.

Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”*. Agregando el inciso segundo *“Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”*.

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

Octavo: Que, de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron



dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos.

A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido indirecto, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió.

Noveno: Que, entonces, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores se yergue como conclusión irredargüible la procedencia de la acción de despido indirecto ante el no pago, por parte del empleador, de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando la relación laboral haya sido declarada en la respectiva sentencia, pues el criterio de este tribunal ha sido el de asemejar el auto despido o despido indirecto en todo orden de materias al despido, como acto unilateral del empleador, habiendo establecido, por la vía de la unificación de jurisprudencia, que cuando se verifica una omisión en el cumplimiento del deber de pagar las cotizaciones previsionales, por parte del empleador, se configura un incumplimiento grave de sus obligaciones, que justifica el despido indirecto, dando lugar a las indemnizaciones legales consecuentes (Rol N° 45.879-2017 y N° 33.256-2019).

Décimo: Que, de este modo, y entrando al mérito de la demanda planteada y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, habiéndose acreditado que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación laboral, a juicio de esta Corte, al tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, una vez que se acogen a jubilación, como, asimismo, las prestaciones de salud y otros beneficios específicos, aparece que la omisión en el cumplimiento de tal deber configura un incumplimiento grave, que justifica el despido indirecto planteado por la actora.

Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, debió ser acogido parcialmente y anulada la sentencia del grado en la parte que se indicará, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Undécimo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la referida materia de derecho objeto del juicio,



el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido parcialmente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en cuanto rechazó el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, que interpuso contra la sentencia de instancia de uno de abril de dos mil veintidós, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en autos Rit O-1192-2021, Ruc 2140364739-7, **y se declara que es nula parcialmente**, en cuanto desestimó la demanda de despido indirecto, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Regístrese.

Rol N° 67.556-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y los abogados integrantes señores Diego Munita L., y Gonzalo Ruz L. No firma la Ministra señora Gajardo y el abogado integrante señor Munita, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE
LIMARE
MINISTRO
Fecha: 05/09/2023 15:31:11

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO
MINISTRO(S)
Fecha: 05/09/2023 15:31:12

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/09/2023 15:31:24



En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primera instancia, con excepción de su motivación 12°, 13° y 15°, que se eliminan.

Del fallo de nulidad se eliminan los considerandos 9° y 10°.

Asimismo, se reproducen las argumentaciones sexta y décima de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que habiéndose constatado o declarado la existencia de la relación laboral, y encontrándose establecido que la empleadora no pagó las cotizaciones de seguridad social de la actora desde el mes de mayo de 2009 a junio de 20019 (puesto que con posterioridad a esta última data resultó acreditado que la actora declaró y pagó sus cotizaciones previsionales como trabajadora independiente) lo que, a juicio de esta Corte, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, configurándose la causal del numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, procede acoger la demanda de despido indirecto, y, en consecuencia, condenarla al pago de las indemnizaciones derivadas del autodespido, manteniéndose las demás decisiones de la sentencia de mérito.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 41, 44, 63, 159, 160, 161, 168, 173, 420, 425, 456, 459 y 510 del Código del Trabajo, **se declara** que:

I.- Se mantienen las decisiones signadas con los numerales I, II, II (SIC) y III de la parte resolutive del fallo de primera instancia.

II.- Se condena a la demandada al pago de las indemnizaciones sustitutiva y la por años de servicios, ésta con un recargo de un 50 por ciento, en base a una remuneración de \$650.000.-

III.- Se rechaza la acción de nulidad del despido.

Ejecutoriada que se encuentre la sentencia, cúmplase con lo que dispone dentro de quinto día. Pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional correspondiente.

Regístrese y devuélvase.

N° 67.556-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y los abogados integrantes señores Diego Munita L., y



Gonzalo Ruz L. No firma la Ministra señora Gajardo y el abogado integrante señor Munita, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE
LIMARE
MINISTRO
Fecha: 05/09/2023 15:31:14

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO
MINISTRO(S)
Fecha: 05/09/2023 15:31:14

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/09/2023 15:31:25



En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

